

FRIBUNA LIBRE

El Estado, que es la más lograda unidad organizativa humana a la que se ha llegado después de muchos avatares a lo largo de la historia, que enmarca un espacio amplio, el más amplio al que hasta este momento podemos aspirar para el desarrollo de la igualdad y de la justicia, está en España, desde hace algún tiempo, sin dirección, sin gobierno, a la deriva. Los partidos políticos son los encargados de orientar. Al gobierno le corresponde fijar el rumbo. Pero aquéllos están ensimismados y el gobierno desnortado.

En los últimos años se produjo en la política un relevo generacional que afectó hondamente a los partidos políticos. Se han ido cubriendo las vacantes en los mandos con personas de nuevo estilo y distinta preparación e ideales. Han ido mutando en empleados de una organización, especialistas en el acceso y mantenimiento en el poder, a cuya preparación han dedicado toda su vida 'profesional'. Manejan las 'artes' de la adaptabilidad, la adulación y la obediencia. Son maleables y permutables, ya que su cobertura ideológica, cada vez más imprecisa, es meramente formal y superficial; y en lo hondo, en los fines está el poder, conseguirlo y permanecer en él, que es su último y principal objetivo.

Este resultado ha sido consecuencia en parte del sistema electoral y en parte de la falta de cultura democrática. Y se han abierto las puertas del poder a la inepticia, a la vez que se cerraban a las personas con criterio y con ideas claras sobre el bien común, al margen de conveniencias partidarias.

Y nuestro máximo organismo representativo, el Congreso de los Diputados, se ha llenado de seguidores incondicionales de consignas y de aplaudidores profesionales, que

MODELO TERRITORIAL / VICTORIO MAGARIÑOS

El autor reflexiona sobre la situación de España como Estado moderno y los problemas a los que se enfrenta

España, un estado a la deriva



e inacción y otras de medidas erráticas o imprudentes.

Existe en España un mal endémico, de origen constitucional, que se «consensua» entre los políticos sin un debate serio y suficiente, que es el sistema autonómico «indefinido» o «indeterminado».

El derroche público, el gasto sin precedentes en alimentar políticamente diecisiete repúblicas dentro del Estado, la debilidad de los gobiernos estatales ante las exigencias regionales, no sólo está desangrando el país, sino que, además, lo está desarticulando, a pique de perder la cohesión de un territorio que tantos siglos ha costado formar.

Y no se puede olvidar, como he dicho al principio, que la igualdad y la justicia son dos fuerzas valor cuya realización se ensancha en función del mayor ámbito territorial y social. Y que en una sociedad tan comunicada como la actual trocear aquellos valores en territorios y espacios vitales más reducidos que el ya conseguido resulta regresivo, desmoralizador y penoso.

La reducción del Estado, aún no terminada, ha llegado a un grado alarmante con los últimos Estatutos de Autonomía, apoyados por el Gobierno del Estado; y sin que el Tribunal Constitucional, paralizado e ineficaz, haya acertado a dictar a tiempo una resolución clara y terminante.

Se está produciendo un traspaso sin límites de competencias, imposiciones arbitrarias, llamadas pactos, en todo caso, reservados y de conveniencia, sobre todo en materia económica, por ciertas comunidades autónomas; a causa de un sistema electoral inaceptable desde el punto de vista democrático, y de la falta de valentía política y altura de miras de los distintos gobiernos. De este modo, se está desnaturalizando el Estado y originando un grave coste que empobrece poco a poco al

recueruan a la cíaque en los reatros.

No remontan la mansedumbre, ni la obediencia interesada, ni la cobardía que les impide plantarse ante su propio partido, o en el Congreso y demás órganos teóricamente representativos, frente a directrices y normas perjudiciales para una convivencia pacífica y el progreso verdadero.

Algún que otro mirlo blanco otea de vez en cuando en el horizonte político, pero pronto los cazadores vigilantes y preparados al efecto caen sobre la presa desviándola al ámbito del silencio y del olvido. Pero no se levantan voces críticas, salvo la de algunos periodistas. Como si lo que está sucediendo fuese una mala racha natural en la evolución social y política.

¿Dónde está la llamada al orden por las personas con peso argumental, de los representantes de la verdadera cultura, la que nace del cultivo de la inteligencia y del trabajo, a los que normalmente el pueblo les reconoce autoridad? ¿En dónde están los que deberían impulsar y movilizar las conciencias con el objeto de marcar el rumbo que remedie la deriva?

¿Dónde están los jóvenes, que en los momentos críticos de una sociedad aportan su transparencia y potencialidad, activando ideales y caminos? ¿Y la Universidad, que siempre fue un foco productor de ideas, luz y respuestas para resolver problemas y corregir defectos que se detectaban en las estructuras sociales o políticas?

Hoy ya no podemos hablar de Universidad. Existen, más bien, universidades, pues del sentido universalista que presidía aquella institución se ha pasado al más local, reducido y de menor nivel que la creación apresurada y múltiple de centros equiparados ha originado. En muchos casos, tales universidades, o mejor dicho facultades disgregadas, no logran levantar el vuelo y se trata solamente de centros o recintos de escaso rigor científico y pedagógico, con impulso cultural muy diluido, que funcionan a modo de escuelas técnicas, con un punto caciquil y anarquizante, en los que la libertad de cátedra es más libertad de actuación que de pensamiento. Tales cen-

Se han abierto las puertas del poder a la inepticia, a la vez que se cerraban a las personas con criterio

tros poco están aportando a la clarificación del panorama actual, y su cada vez menor relevancia social resulta significativa.

Por otra parte, el medio clave de comunicación, que es la TV, se distingue por la ocultación de los graves problemas, por el desvío sistemático hacia contenidos meramente informativos, nunca explicativos; y cuando plantea un problema político o económico el debate sobre el mismo es mínimo no sólo por el tiempo que le dedica sino por el carácter o sesgo partidario cuando no sectorario que le imprime.

No hay pues organización, academia o asociación que rompa el silencio y dé la voz de alarma. Lo único que se oye es un murmullo opaco y denso como el de un enjambre de abejas, que avanza sobre el territorio de los ciudadanos, que tan diferente resulta del de los políticos.

No hay voces singulares, que en defecto de los que debieran hacerlo por oficio no advierten del peligro o deterioro. Y es que se ha generado una especie de miopía democrática, o mejor «complejo de soberanía» que aqueja a los políticos, pero también a un gran sector de la población, y que parte de la premisa de que la elección por el pueblo provoca una legitimación absoluta. De este modo, los que llegan a cargos de gobierno, aunque luego se compruebe que carecen de la más elemental prudencia y sentido común, gozan del aval de las urnas y permanecen blindados durante el tiempo que dura su mandato. Con lo que se permiten excesos y desvíos, que en ocasiones, cada vez más frecuentes, sólo se corrigen a destiempo y en los juzgados.

Se ignora que, en una verdadera democracia, bien porque existan resortes legales o

El gasto en alimentar 17 repúblicas dentro del Estado está desangrando y desarticulando el país

prácticas adecuadas para evitar el desgobierno, o porque la cultura democrática y la crítica de «autoridad moral» conducen a la dimisión voluntaria del que incurre en error grave de gobierno, no llega a producirse la deriva del Estado.

Y es que los que ocupan cargos de gobierno debieran estar sujetos al control permanente y continuo, y no sólo al espaciado de la votación. Es preciso conseguir que en España se inserten las soluciones y se suplan las carencias que impiden la natural corrección de conductas que lleven al declive o deterioro del propio Estado o de la convivencia social.

Es necesario hablar de responsabilidad, y no sólo política, de los gobernantes que desatienden o vulneran las normas constitucionales o cualquier otra, o que causen graves daños económicos o de otra índole a la sociedad. También ir desmontando los privilegios que se han reservado los políticos en ese pacto entre ellos mismos que supuso la Transición.

Conviene no olvidar que los gobernantes son gestores de lo público, y que todo gestor debe rendir cuentas y responder de los perjuicios causados por dolo o negligencia.

El Gobierno de España ha dado muestras más que suficientes de inseguridad, desorientación e inepticia. Se han producido graves e irreparables daños en las instituciones que engrasan el sistema democrático, en la propia estructura del Estado debilitándolo al alentar nuevos estatutos que son verdaderas constituciones regionales, en la economía del país que no acierta a encauzar y fortalecer con decisiones adecuadas, y también consecuentemente en la paz social. Todo ello derivado unas veces de falta de impulso

pueblo en aras del lujo con el que se pretende rodear la alta representatividad regional y también un injusto reparto de la riqueza que pone en entredicho todo el sistema democrático español.

Y más aún si se tiene en cuenta la tolerancia respecto de la actividad legislativa de las comunidades autónomas, las cuales, a la vista y paciencia del Estado, promulgan leyes del contenido más diverso, arrogándose tal facultad, bien por considerar de modo forzoso que se relacionan con materias de su competencia, o simplemente imponiéndolas de modo directo y sin más trámite que la fuerza de los hechos consumados. Siendo su objetivo final conseguir una legislación independiente, distinta y total, como se advierte en la pretensión de poseer un Código Civil propio, máximo exponente del poder del Estado.

Todo ello ha originado en España una situación de inseguridad jurídica debido a tal galimatías normativo. Pero, además, y como consecuencia, han quedado seriamente afectadas la igualdad y, por lo tanto, la justicia, y planea sobre la sociedad española una regresión en el desarrollo y extensión de tales valores.

Ante la deriva del Estado, y visto el panorama social y político, así como la ausencia de mecanismos institucionales eficaces que la corrijan, la crisis económica que parece nos podría servir de revulsivo clarificador.

Ante una situación de peligro, una sociedad vital y fuerte, como la española, podría generar la reacción necesaria para ello, obviando los mitos y miedos que los políticos de la Transición han alimentado. Tomemos las medidas y se realicen las reformas necesarias, incluidas las constitucionales, que rompan la inercia institucional, y devolvamos la organización jurídica de la sociedad a quien es el Estado, de los medios democráticos adecuados para que la inepticia se expulse de la política y que el mérito y la eficiencia sean los criterios de selección de nuestros dirigentes.

Victorio Magariños es notario y académico de la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia.